

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUGA (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA : DEMANDA DE REPARACION DIRECTA
DEMANDANTES : DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ Y OTROS
DEMANDADOS : NACION – RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION

1

ANDREA CAICEDO TOFIÑO, mayor de edad, domiciliado en Buga Valle del Cauca, identificado con la C.C. No. 1.115.071.122, portador de la T.P. No. 224.556 del C.S.J., en calidad de Apoderado Judicial y que actuare como demandante en causa propia, en calidad de hija del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ perjudicado directo y de las Personas que adelante citaré e identificaré, de conformidad con los Poderes que anexo, como aceptación de los mismos, en forma respetuosa formulo demanda en ejercicio del medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA**, de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Nación – **RAMA JUDICIAL**, representada legalmente por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, y de la Nación – **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, representada legalmente por el Fiscal General de la Nación, por la Responsabilidad Administrativa y Patrimonial que les fuere imputables por los perjuicios causados a todos y cada uno de los demandantes, como consecuencia de la falla del servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES:

DEMANDANTES

1º.- DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.882.532, en calidad de DIRECTO AFECTADO.

2º.- MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA, en calidad de esposa, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.860.761.

3º.- DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO, mayor de edad, identificado con la CC. No. 94.479.017, en calidad de HIJO.

4º- EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.115.067.654, en calidad de hijo.

5º.-ANDREA CAICEDO TOFIÑO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.115.071.122, en calidad de hija.

6º- AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO, mayor de edad vecina de Buga, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.265.980, en calidad de Madre de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ.

7º.- JAIRO CAICEDO PEREZ, mayor de edad vecino de la ciudad de Buga, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.873.326, en calidad de HERMANO de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ.

8º.- CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ, mayor y vecino de la ciudad de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.878.824, en calidad de HERMANO de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ.

9º.- MARIA TERESA CAICEDO PEREZ, mayor y vecina de Pereira (Rda.), identificada con la cédula de ciudadanía No.38.861.353, en calidad de HERMANA de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ.

DEMANDADOS

1º.- LA NACION, RAMA JUDICIAL representada por el Director Ejecutivo de Administración judicial, o quien haga sus veces en su ausencia temporal o definitiva.

2º.- La NACION, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representa por el Fiscal General de la Nación, o quien haga sus veces en sus ausencia temporal o definitiva.

PRETENSIONES

Declárese Administrativa y Patrimonialmente responsable de manera solidaria, a la Nación – RAMA JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACION, por los **PERJUICIOS MATERIALES, y MORALES**, ocasionados a **DEGO JOSE CAICEDO PEREZ (demandante), MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA (esposa), DAVID ESTEFAN, EDDER ALBERTO Y ANDREA CAICEDO TOFIÑO (hijos), AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO (madre de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ), JAIRO CAICEDO PEREZ, CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ y MARIA TERESA CAICEDO PEREZ (hermanos)**, como consecuencia de una evidente Falla en la prestación del servicio de justicia, por parte de las entidades Demandadas, al adelantar un procedimiento con total desatención de los principios de CELERIDAD Y EFICACIA, generándole a los actores daños por el

tiempo que permanecieron atentos al proceso desde el 19 de octubre de 2008, hasta el 27 de septiembre de 2013.

Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades demandadas, a pagar a los actores los perjuicios que se detallan a continuación y en la cuantía que se determina.

MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

A favor del convocante señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, en contra de quien se adelantó la Acción Penal, dentro de la cual debió otorgar poder a un abogado de confianza a efectos de que asumiera su defensa, lo que generó un perjuicio material que debe ser indemnización, liquidándose en la modalidad daño emergente, el cual se estima como mínimo en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE (\$30.000.000.00), correspondientes al valor cancelados por concepto de honorarios profesionales.

LUCRO CESANTE

Determinable de acuerdo con la base y la cuantía que resulte del acervo probatorio demostrado en el proceso, por la imposibilidad de continuar percibiendo los ingresos devengados durante el desempeño del cargo de funcionario judicial, con los cuales velaba por su sustento, a favor de quien se reconocerá y pagará.

Para su liquidación se deberá tener en cuenta las fórmulas del Consejo de Estado y las tablas de supervivencia adoptadas por la superintendencia Bancaria.

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO O VENCIDO.

Se estimará desde la fecha de la ocurrencia de los hechos imputables a las Entidades convocadas hasta la fecha de la sentencia. El cual se estima al momento de radicación de la presente solicitud de conciliación, como mínimo en las siguientes sumas:

Por el año de 2009, Sesenta millones de pesos m/cte (\$ 60.000.000.00).

Por el año de 2010, Sesenta millones de pesos m/cte (\$ 60.000.000.oo).

Por el año de 2011, Sesenta millones de pesos m/cte (\$ 60.000.000.oo).

Por el año de 2012, Sesenta millones de pesos m/cte (\$ 60.000.000.oo).

Por el año de 2013, Sesenta millones de pesos m/cte (\$ 60.000.000.oo).

Justamente, sobre el tópico, esto es, la procedibilidad del resarcimiento del daño que se genera por la pérdida de oportunidad, se ha referido la Jurisprudencia de la Alta Corporación Contenciosa Administrativa, contenida en la Sentencia del 3 de abril de 2013, dictada dentro del Expediente 26.437, ha referido:

4

“2.- La ‘pérdida de oportunidad’ o ‘pérdida de chance’ como modalidad del daño a reparar.

“Se ha señalado que las expresiones ‘chance’ u ‘oportunidad’ resultan próximas a otras como ‘ocasión’, ‘probabilidad’ o ‘expectativa’ y que todas comparten el común elemento consistente en remitir al cálculo de probabilidades, en la medida en que se refieren a un territorio ubicable entre lo actual y lo futuro, entre lo hipotético y lo seguro o entre lo cierto y lo incierto (...) Es decir que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades.

“En ese orden ideas, la pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta ésta que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio —material o inmaterial— para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.

“La pérdida de oportunidad constituye, entonces, una particular modalidad de daño caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado; expuesto de otro

modo, a pesar de la situación de incertidumbre, hay en este tipo de daño algo actual, cierto e indiscutible consistente en la efectiva pérdida de la probabilidad de lograr un beneficio o de evitar un detrimento...”

MORALES

5

Estos perjuicios surgen como consecuencia de la vulneración del **derecho fundamental (LIBERTAD)**, que tenía y que tiene DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por la ORDEN DE CAPTURA, DETENCION y poner a disposición a mi mandante, a quien se le abrió una investigación y el injusto proceso al que fue sometido, así como a todos y cada uno de los demandantes que directamente se afectaron con esta errada medida, su esposa MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA, sus hijos DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO, EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO, ANDREA CAICEDO TOFIÑO, su madre AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO y sus HERMANOS, JAIRO CAICEDO PEREZ, CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ y MARIA TERESA CAICEDO PEREZ, todos ellos quienes se vieron privados de la compañía y del amor familiar que este les profesaba y les profesa, luego de librársele orden de captura, un juicio torturoso y una sentencia mañosa sin criterio jurídico. Debiendo reconocer y pagar las Entidades convocadas las siguientes sumas de dineros:

DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ (demandante), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA (esposa), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO (hijo), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO (Hijo), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ANDREA CAICEDO TOFIÑO (hija), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO (madre), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

JAIRO CAICEDO PEREZ (hermano), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ (hermano), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

MARIA TERESA CAICEDO PEREZ (hermana), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DAÑO A LA VIDA DE RELACION

■ **Qué situaciones pueden alterar la vida de relación de las personas y ser objeto de reconocimiento?**

■ Una acusación calumniosa o injuriosa (art. 4º Decreto 1260/70) Ej: Sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11413, actor: Gilberto Márquez, M.P. Dr. Alier Hernández;

■ Un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece. Ej: Sentencia del 23 de agosto de 2001,exp. 13745, actor: María Rocío Tabares, M.P. Dr. Germán Rodríguez;

■ Y una afectación al patrimonio (gran pérdida económica).

PERJUICIOS MORALES Y DAÑO A LA VIDA DE RELACION¹

Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado² la valoración del perjuicio moral se tendrá en **salarios mínimos legales mensuales**, atendiendo

¹ **DAÑO FISIOLÓGICO HOY A LA VIDA DE RELACIÓN** Jul. 19/00, exp. 11842, M.P. Alier Hernández: ”El reconocimiento de este perjuicio debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteren la vida de relación de las personas, por lo que la denominación de este rubro corresponde a la de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN.

² Sentencia del 6 de septiembre de 2001 con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, dentro del proceso propuesto por Belén González y otros contra el Instituto Nacional de Vías y Ministerio de Transporte.

Vale la pena señalar que EL PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN reconocido por la Jurisprudencia Contenciosa Administrativa Colombiana, guarda cierta semejanza conceptual con el rubro denominado “daño al proyecto de vida” que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo se hace la salvedad de que la Corte I.D.H., ubica este rubro en la categoría de daño material, mientras que en Colombia, el perjuicio a la vida de relación pertenece a la categoría de perjuicios inmateriales. Ha sostenido la Corte I.D.H.:

“...el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto pueda tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y la garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte. (...). [E]l “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos de poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el

los principios de *Reparación Integral y Equidad* que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Habida cuenta que la familia CAICEDO-TOFIÑO, ha padecido el sufrimiento emocional, la incertidumbre y angustia por la que pasaron por la detención de su ESPOSO-PADRE-HIJO-HERMANO, el cual le ha generado que el disfrute normal de sus actividades tanto personales como familiares se hayan visto manifiestamente limitadas, mucho más de considerar su edad.

7

Se reafirma la existencia de este tipo de perjuicio, por cuanto a la familia CAICEDO-TOFIÑO, le ha causado una pasividad pasmosa para el desarrollo de todas sus labores, ocasionándole serios traumatismos reflejada en sus relaciones interpersonales. No se han hecho tan agradables sus actividades como cuando gozaba de todas sus capacidades, YA QUE AL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, tuvo que afrontar una GANGRENA DE FORNIERTH por espacio de MAS DE UN AÑO, con COLOSTOMINA y TRATAMIENTO POR ESPACIO DE MAS DE UN AÑO EN EL VALLE DEL LILI DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, debido a su ESTRÉS en que ha vivido el señor en sus ULTIMOS AÑOS.

Sin duda alguna la supresión de algunas tareas placenteras para la familia CAICEDO-TOFIÑO, como el compartir en familia, entre otras; ha desencadenado un desarrollo anormal entre sus vidas que debe ser reparado.

El solo hecho de TENER que RENUNCIAR a una LABOR QUE LLEVABA MAS DE VEINTICUATRO (24) AÑOS, El tener una ORDEN DE CAPTURA, A ESTAR PRIVADO DE LA LIBERTAD y VERSE SOMETIDO A UN JUICIO PENAL DURANTE MAS DE CINCO AÑOS, su ESPOSA, HIJOS, MADRE Y HERMANOS verse en esa situación, es causa de mucha tristeza y profundo dolor, que les fue ocasionado a los demandantes, desde el mismo instante en que RENUNCIA a su CARGO PROFESIONAL, A UNA ORDEN DE CAPTURA que fue sometido DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, y a un TORTUROSO proceso DE JUICIO PENAL, al RECHAZO SOCIAL, COMUNITARIO, LABORAL DEBIDO A la pérdida de su trabajo del que derivaba su único sustento y con el cual sostenía a su ESPOSA, HIJOS –Estudiantes Universitarios, MADRE y colaboraba con sus hermanos.

De otro lado, LA DISCRIMINACION a que fue sometido el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, quien por el solo hecho de estar vinculado a un proceso de **Obtención de DOCUMENTO PUBLICO FALSO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO**, le toco vivir la peor situación en su trabajo como Empleado de la Rama Judicial y

ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito”. Ver entre otras: Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones, párr. 147 y ss.

luego como ABOGADO LITIGANTE, ya que termino con un INRI de TORCIDO, el cual ha sido objeto mi representado y su familia.

Así mismo por la intensa angustia que vivieron en virtud de la separación intempestiva de su familia y el injusto proceso penal a que se vio avocado teniendo en cuenta que los FISCALES LUIS ALFONSO PATIÑO LOPEZ y LUZ ANGELA ACEVEDO, no solo realizaron la INVESTIGACION, SOLICITARON LA ORDEN DE CAPTURA y ESTUVIERON PRESENTES EN EL JUICIO, sino que además hicieron aseveraciones en su contra.

DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ (demandante), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA (esposa), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO (hijo), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO (HJO), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ANDREA CAICEDO TOFIÑO (hija), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO (madre), CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

JAIRO CAICEDO PEREZ (hermano), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ (hermano), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

MARIA TERESA CAICEDO PEREZ (hermana), CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

INTERESES: Los causados desde la fecha del reconocimiento hasta el momento efectivo del pago.

Mediante el análisis defectuoso por la señora Juez, se puede concluir que **NUNCA EXISTIO EL MÁS LEVE INDICIO DE CULPABILIDAD SOBRE EL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, PUES PREFIEREN DEJAR PASAR EL TIEMPO PARA UNA PRESCRIPCION, QUE UN FALLO SIN PRUEBAS Y CRITERIO JURIDICO**, como también la Fiscalía General de la Nación, en representación de sus diferentes funcionarios, pregunto: ¿Cómo pueden dichas Instituciones acusar-condenar al Accionante, cuando no existieron pruebas contundentes para solicitar su CAPTURA y condena, y posteriormente salió absuelto?

¿Cuánto daño le causaron a DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ y a su familia?

Es de mencionar que la Fiscalía General de la Nación, a través de SUS FUNCIONARIOS, tuvieron el tiempo suficiente para pronunciarse más seriamente y ajustados a la ley, para determinar que para el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEERZ, EXISTIA LA PRUEBA Y ESCRITO DE QUIEN HABIA COMETIDO EL HECHO PUNIBLE, señor JULIO MARMOLEJO SERNA, quien solicitaba se excluyera al señor CAICEDO PEREZ, de esta investigación y que lo LLAMARAN A JULIO MARMOLEJO SERNA, , para REPARARA el DAÑO QUE HABIA COMETIDO y así aliviar la injusticia que se le venía al señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ. La investigación tortuosa, era hacerle DAÑO al señor CAICEDO PEREZ, para que RENUNCIARA a LA RAMA JUCIDIAL y dejara perdidos sus -24 años. Se ve claramente que teniendo al señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por FUERA de la RAMA JUDICIAL, en NADA IMPORTABA, librársele UNA ORDEN DE CAPTURA, peligrosa y sin PESO JURIDICO, COMO LES DEJO EN CLARO EL JUEZ DE CUARTO DE GARANTIAS en la AUDIENCIA DE IMPUTACION DE CARGOS Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. Logrado lo querido por el señor FISCAL LUIS ALFONSO PATIÑO, para el señor CAICEDO PEREZ, a engrosar su situación infrahumana para verse en la necesidad de pedirle a su familia, madre y HERMANOS sustento para medio vivir.

De lo anterior dejo probado que la Fiscalía GENERAL DE LA NACION, con sus FUNCIONARIOS LUIS ALFONSO PATIÑO LOPEZ y LUZ ANGELA ACEVEDO CASTAÑO y sus AUXILIARES, SON SUFICIENTES negligente al no enmendar el error que habían cometido, Y SIGUIERON COMETIENDOLO DURANTE EL JUICIO, a PESAR DE QUE EL JUZGADO CUARTO PENAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS en las AUDIENCIAS PRELIMARES, les DEJO EN CLARO PORQUE NO SE LE DICTO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ intramuralmente, pues las PRUEBAS QUE TENIAN, NO ERAN PARA ADELANTAR UN JUICIO DE ESTA MAGNITUD.- Igualmente es triste como siguen ADELANTANDO UN JUICIO con las MISMAS PRUEBITAS, porque NO SON PRUEBAS CONDUNDENTES, CREIBLES, CIERTAS Y DEMÁS para BUSCAR ACUSAR AL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, y PEOR AUN CUANDO LA JUEZ CREE EL MISMO CUENTO TEORICO DE LA FISCALIA, que NADA DEMOSTRARON EN EL JUICIO.

Falla del servicio y nexo de causalidad en atención a las demás pruebas recaudadas en el proceso.

Lo expuesto a lo largo de la demanda referida halla soporte suficiente en los testimonios recaudados, sin creencia, sospechosos, familiares Y SIN PRUEBA DE COTEJO DE FIRMAS, HUELLAS, SIN TESTIMONIOS NOTARIALES, que CALLO LA FISCALIA, y que en NADA CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO, cuando la NORMA DICE QUE SE PRESENTARAN TODAS LAS PRUEBAS FAVORABLES y DESFAVORABLES. No se preocupó LA FISCALIA Y JUZGADO de CONOCIMIENTO, a ver como se dañaba la IMAGEN DE UNA PERSONA como DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, con CARRERA COMPLETA EN LA RAMA JUDICIAL, o es que al SEÑOR LUIS ALFONSO PATIÑO, le DOLIO QUE EL SEÑOR CAICEDO, como PRESIDENTE DE ASONAL JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DE BUGA, le CERRARA las puertas de INGRESO A LA FISCALIA, donde el FUNCIONABA y que en varias veces le envió la POLICIA, con el

ARGUMENTO QUE LA FISCALIA NO TENIA QUE VER CON LOS PAROS DE LA RAMA JUDICIAL.

De conformidad con lo expuesto, considero que hay una falla ostensible del servicio de administración de justicia y que hay un nexo de causalidad entre la actuación del Estado y los daños irrogados al señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, todo lo cual da lugar a que en el presente caso haya una sentencia ABSOLUTORIA. Dejo en CLARO QUE LOS SEÑORES SERVIDORES DE LA JUSTICIA, FISCALIA Y RAMA JUDICIAL, al MOMENTO DE NO TENER PRUEBAS SUFICIENTES, CLARAS y DEMOSTRATIVAS CONTRA DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, comienza a manejarse el TIEMPO CON DEMORAS, EXCUSAS y DEMAS, para ENTRAR A RESOLVER EN UNA SENTENCIA LA PRESCRIPCION y DECIR tranquilamente QUE EL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, si COMETIDO EL HECHO PUNIBLE en LOS DELITOS DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO y OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, pero QUE DEBIDO A LA PRESCRIPCION SE LE ABSUELVE. Señores PROCURADORES es MAS FACIL para UN JUEZ decir en su TEORIA del SENTIDO DEL FALLO que CONDENARA a DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, y que LUEGO EN SU SENTENCIA, dice tan OLIMPICAMENTE, que al señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, le ha PRECRIPTO todos los DELITOS ENDILGADOS. SEÑORES PROCURADURIA es MAS FACIL para UN FUNCIONARIO –JUEZ o FISCAL, decir PRESCRIBIO a que LE REVOQUEN LA SENTENCIA y NO VER COMPROMETIDO AL ESTADO. Pensó la señora JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, que por el HECHO DE EXISTIR la PRESCRIPCION contra DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, NO SE DEMANDARIA ADMINISTRATIVAMENTE AL ESTADO. ESTA ES LA JUSTICIA, sin pruebas, sin celeridad, sin argumentos, todo esto DA LUGAR A QUE EL SEÑOR DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, tiene derecho a ser INDEMNIZADO por la FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINITRACION DE LA JUSTICIA.

Quiero llamar la atención, acerca de que la privación de la libertad es la máxima sanción jurídica a la que se puede someter a una persona dentro del derecho penal colombiano y que todo lo que a tal medida atañe debe manejarse y decidirse con el mayor cuidado y atención por los funcionarios judiciales. El derecho de los colombianos a la libertad ha de ser respetado, como la Constitución Política claramente lo ordena, en atención al principio de igualdad, sin consideraciones específicas que tiendan a que las sanciones legales que comprometan el mencionado derecho sean más o menos estrictas, o a que se resuelvan favorablemente en un término mayor o menor, por la pertenencia del sujeto a quien se sanciona a un grupo especial, privilegiado o marginado de la sociedad. No obstante lo anterior, para el Togado resulta claro que las personas respecto de las cuales se advierte sobre la SITUACION ECONOMICA del señor CAICEDO PEREZ, ya que está atravesando UNAS CIERTAS CANTIDADES DE DEMANDAS CIVILES por LAS OBLIGACIONES que dejo de PAGAR por este PROCEDIMIENTO PENAL, además de las DEUDAS que tiene con su APODERADO Dr. MEDARDO GUTIERREZ, en el conflicto penal QUE LO ASISTIO. No pueden sumarse a las adversidades de su vida la demora, ineptitud e ineficiencia de los funcionarios judiciales encargados de definir sobre la privación de su libertad, de un JUICIO que no se DISLUMBRO sino el TIEMPO, pues la suspensión de los TERMINOS en nada que decir, YA QUE NO EXISTIO UNA JUEZ de CONFIANZA para el ESTADO que HICIERA CUMPLIR los TERMINOS que exige LA LEY.

Las autoridades judiciales deben obrar en todos los casos con sujeción a la Constitución Política y a las leyes y deben procurar que en sus actuaciones no se desatiendan las garantías propias de las personas sometidas al poder de sus decisiones, razón por la cual el apoderado deplora y rechaza vehementemente que a una persona, por HACER UN FAVOR, UN MANDATO en un PODER sin saber que dentro del mismo venía el VENENO de ALGUIEN QUE NO EXISTIA, tenga que verse envuelto en una DENUNCIA PENAL, resultando encarcelado por un término a todas luces excesivo y que el argumento central para solicitar LA ORDEN DE CAPTURA era por los delitos de ESTAFA, OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, que según en aquel MOMENTO fueron RESPALDADOS con ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO SUFICIENTE.

Resulta inaceptable que una autoridad judicial se OLVIDE del argumento en desconocer los ESCRITOS del señor JULIO MARMOLEJO SERNA, donde aclara que el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, no sabía nada, y que toda su FAMILIA, sabía del NEGOCIO que JULIO MARMOLEJO ESTABA REALIZANDO.

El apoderado de la parte demandante, TUVO QUE DECIRLE A LOS FUNCIONARIOS JUEZ Y FISCALIA sobre EL PODER ENVIADO, ya que DICHAS FUNCIONARIAS estaban en el JUICIO y TODAVIA NO SABIAN DE DONDE HABIA PROVENIDO EL PODER A DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ. Que FALTA DE ATENCION a un JUICIO. Todo lo NARRADO LLEVO A LA FAMILIA CAICEDO TOFIÑO, a VIVIR UNA SITUACIÓN ECONOMICA como la que argumento La Corte Constitucional ha dicho sobre el particular:

“La pobreza, sin duda, atenta contra la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Sus causas estructurales son combatidas mediante políticas legislativas y macro - económicas. Sus efectos, en cambio, exigen de una intervención estatal directa e inmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”³.

En otro pronunciamiento de la misma Corporación se precisó:

“La sociedad no puede asumir una actitud de desprecio o de pasiva conmisericordia hacia quienes, por fuerza de las circunstancias, llevan una vida sub - normal y altamente lesiva del derecho a la igualdad que pregonan la Carta. Su papel y muy especialmente el del Estado debe ser, por el contrario, el de buscar, dentro del criterio de solidaridad, soluciones eficaces y urgentes a la problemática que plantea la proliferación de cinturones de miseria en las ciudades, ya que el artículo 13 de la Constitución le ordena, como atrás se dijo, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados”⁴.

Está claro que en este caso las autoridades judiciales de la entidad demandada desampararon a quien era el más débil de la situación y su más auténtica víctima y que al obrar en tal sentido desatendieron gravemente los mandatos de la Constitución Política y de las leyes.

Obligación del Estado de indemnizar en el asunto *sub judice*.

³ Sentencia T-533 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

⁴ Sentencia T-376 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha asumido una posición clara acerca de la responsabilidad del Estado en caso de privación de la libertad por considerarla objetiva, la cual se puede explicar, en términos generales, así:

“... no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando a pesar de haber dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la Ley para el efecto, profiere posteriormente una resolución de preclusión de la investigación por no encontrar pruebas suficientes en contra del investigado, teniendo en cuenta que a éste se le privó de su libertad por un período mayor a 13 meses. La falta de certeza no provee un justo título –ex post- a una privación de libertad y menos por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido, esto es que jamás se ha desvirtuado la inocencia que siempre ha acompañado y cabe predicarse respecto del aquí demandante.

Así pues, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerte y sin derecho a tipo alguno de compensación –como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de uno de sus bienes jurídicos más preciados, quizá el segundo en importancia después de la vida, como es la libertad y menos si esa situación se prologó por un período superior a un año, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público a la cual le corresponde la carga de la prueba no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba.

Si no se razonase en el sentido indicado se tendría como resultado una insostenible contradicción, puesto que el individuo en cuyo favor se pronuncia la preclusión de la investigación penal, la cesación del procedimiento o la sentencia absolutoria aparecerá como inocente ante el Estado en asuntos penales sin que por esos hechos se hubiere desvirtuado la presunción de constitucionalidad que lo ampara mientras que en un desdoblamiento inexplicable en el campo patrimonial aparecería ante el mismo Estado y por los mismos hechos como culpable o responsable, situación esta que, precisamente, determinaría la denegación de sus pretensiones resarcitorias.”⁵

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso concreto que ahora se estudia se ha probado de manera suficiente que hubo una falla del servicio por parte de LA JUEZ PRIMERA PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO y a LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en el sentido que privaron de la libertad al Demandante –UNA ORDEN DE CAPTURA, sin tan siquiera la Fiscalía al recaudar todas las pruebas que reposan en el plenario y con la confesión del señor JULIO MARMOLEJO SERNA, no evidencio que el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, era inocente de todo cargo.

En atención a lo anterior, de acuerdo con una posición pacífica y reiterada el Consejo de Estado, cuando quiera que en un proceso, en el cual se clame por la declaración de responsabilidad del Estado y por la condena consecuente, se

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de 2007, Radicación: 520012331000199607870 01 (16.057); Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez; Demandado: Fiscalía General de la Nación.

acredite la presencia de una falla del servicio, será este el título de imputación de responsabilidad con base en el cual se habrá de decidir, puesto que representa el régimen por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado.

Así, el Consejo de Estado ha precisado que la ubicación preponderante del referido régimen de responsabilidad del Estado respecto de los otros, obedece, **(i)** en primer lugar, a que “... *la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones*”⁶; **(ii)** en segundo lugar, la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la Administración; **(iii)** en tercer lugar, como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación *sub judice*, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; **(iv)** finalmente, para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar.

PERJUICIO A LA VIDA DE RELACION - PRINCIPIO DE LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO - INTERPRETACION DE LA DEMANDA - PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.-

Ahora bien, además de la afectación emocional íntima sufrida por la familia CAICEDO-TOFIÑO, como consecuencia del daño que le fue causado, a su ESPOSO-PADRE-HIJO-HERMANOS, **se les generó un perjuicio a la vida de relación**, cuya solicitud de reparación puede encontrarse en la demanda, y al hacer uso de las facultades interpretativas que le corresponde al Juez en aras de la reparación integral del daño. Pues la demanda debe ser vista como un todo, a partir del cual el Juez está en el deber de extraer de cada uno de sus componentes las pretensiones y los hechos relevantes al caso concreto, en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial -art. 228 C.P.- y de la máxima “dame los hechos que yo te daré el derecho”. Dicha situación, (...) da lugar a la producción de un daño inmaterial diferente del moral, que desborda el ámbito interno del individuo y se sitúa en su vida de relación, es decir, se ve afectada la vida exterior de la familia CAICEDO-TOFIÑO, en cuanto se evidencia una alteración negativa de las posibilidades que tiene de entrar en relación con otras personas o cosas, de llevar a cabo actividades de disfrute o rutinarias o, la modificación de sus roles en la sociedad o en sus expectativas a futuro.

La Sala⁷ al respecto ha señalado:

El señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, sufre lesiones que producen alteraciones físicas que alteraron su organismo, el cual cae en un PROBLEMA DIABETICO,

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, Radicación: 66001-23-31-000-1998-00687-01(18380); Actor: Hernando Elías Gómez Henao y otros; Demandado: Fiscalía General de la Nación

⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra Bogotá D.C., marzo ocho (8) de dos mil siete (2007) Radicación número: 17001-23- 31-000-1993-05009-01(15739) Actor: Daniel Rodrigo Ibáñez y otros Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional Referencia: Acción de Reparación Directa

DEPRESIVO, ALTA PRESION y demás que sufre su físico y que REVIENTA EL TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014), con una GANGRENA DE FORNIERT.

“...tratándose de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las víctimas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, daño extrapatrimonial que ha sido denominado por la doctrina como perjuicio fisiológico, alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación y que consiste en la afectación extrapatrimonial de la vida exterior de las personas. En sentencia del 19 de julio de 2000, exp: 11.842, la Sala consideró que el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran la vida de relación de las personas; igualmente se ha considerado que tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, cónyuge e hijos; ni debe restringirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede referirse también al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás ya que puede serlo con las cosas del mundo. La existencia de este perjuicio como la de los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida familiar y laboral.”⁸. (Subrayado y Negritas fuera de contexto).

14

INDEXACIÓN. Teniendo en cuenta que en Colombia el dinero no mantiene su poder adquisitivo constante, las condenas solicitadas deberán indexarse de la época de ocurrencia de los hechos a la fecha de la sentencia, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor.

INTERESES. Las condenas liquidas reconocidas en la sentencia devengaran intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta su pago total. Se tendrá en cuenta que todo pago parcial se imputará primeramente a intereses (Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 1653 del Código Civil).

HECHOS EN QUE FUNDAMENTO LO ANTERIOR

PRIMERO: El señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, estuvo vinculado a la Rama Judicial, por espacio de veinticuatro (24) años, comprendidos entre el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983), hasta el año de dos mil siete

⁸ Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 20 de 2005, Exp. 15247, C.P. Ruth Stella Correa.

(2007), trayectoria en la que desempeñó distintos cargos, siempre en forma ascendente, dado que en su inicio como empleado fue Citador del Juzgado Primero Civil del Circuito de Guadalajara de Buga; Oficial Mayor del Juzgado Segundo de Familia de Guadalajara de Buga; Oficial Mayor de la Sala de Familia del H. Tribunal Superior de Guadalajara de Buga; Auxiliar de Magistrados de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga; Secretario de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Buga. Y debido a sus cualidades personales y profesionales, fue nombrado como Juez de la Republica, cargo que desempeño en forma continua y en distintos Despachos Judiciales, así: Civil Municipal, Penal, Promiscuo y de Familia, todos del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga.

SEGUNDO: En el año de dos mil seis (2006), cuando aún el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se encontraba vinculado a la Rama Judicial, se formula en su contra denuncia penal ante la Fiscalía, por los delitos de OBTENCION DE DOCUMENTOS PUBLICO FALSO, ESTAFA, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y ASESORAMIENTO ILEGAL, siendo denunciante la señora MYRIAM MARMOLEJO DE RAMOS, con ocasión del negocio jurídico de compraventa de bien inmueble, contenido en la escritura pública No. 2904 del 26 de septiembre de 2006, de la Notaria Segunda del Círculo de Buga.

TERCERO: Las actuaciones surtidas por parte de la FISCALIA durante la etapa instructiva, denotan una persecución contra el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, dado que a pesar de que en la versión presentada por este, se manifiesta y demuestra claramente lo ocurrido dentro del negocio de compraventa, en el cual actuó en ejercicio del poder especial que le fue enviado por el señor JULIO MARMOLEJO SERNA, desde la ciudad de Medellín (Ant.), y cuyo objeto era el de realizar la venta de una CASA en la ciudad de Buga, el ente investigador hizo caso omiso a la petición formulada por el señor JULIO MARMOLEJO SERNA, en la que solicitaba a la Fiscalía General de la Nación, QUE LO LLAMEN A DECLARAR sobre los HECHOS, prueba de vital importancia ya que fue él quien se encargó de HACER LA RESPECTIVA PRESENTACIÓN Y EL POSTERIOR ENVIO DEL PODER. Así mismo fue quien recibió el producto de la venta de la CASA, ya que ese dinero fue consignado a la cuenta indicada por él.

CUARTO: Con base en las investigaciones e informaciones recaudadas, la FISCALIA procedió a imputarle cargos por los delitos denunciados, proceso penal

que se tramitó ante el respectivo Despacho Judicial bajo el radicado Numero 76-111-6000165-2007-00289, dentro del cual formaban la parte demandada el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ y ELIZABETH MARMOLEJO MEJIA.

QUINTO: El proceso penal iniciado en contra del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, afectó su desempeño laboral, ya que su hoja de vida no volvió a ser tenida en cuenta para NOMBRAMIENTOS de Juez.

16

SEXTO: De la situación, el mejor consejo que se le brindó al señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por parte de sus superiores y de su JEFE INMEDIATO para ese entonces, EL SECRETARIO DE LA SALA CIVIL FAMILIA, fue que era mejor que se RETIRARA de la Rama Judicial, ya que debido a la DENUNCIA que existía en su contra, en nada lo favorecía.

SEPTIMO: El día treinta (30) de agosto del año de dos mil siete (2007), el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, RENUNCIA a la Rama Judicial, por el manto de duda que recaía sobre él, ante los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga Valle.

OCTAVO: El señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se ve obligado a ejercer su profesión de Abogado en el LITIGIO, en lugar en donde se encuentra establecida su domicilio, que corresponde a la misma ciudad en la que se presentaron los hechos por los cuales se le adelanta proceso penal, esto es, en el Municipio de Guadalajara de Buga Valle.

NOVENO: El día 12 de Septiembre de dos mil ocho (2008), el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Garantía, procede a emitir ORDEN DE CAPTURA A DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por los delitos de ESTAFA, OBTENCION DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, ante la solicitud de los FISCALES LUIS ALFONSO PATIÑO LOPEZ y LUZ ANGELA ACEVEDO CASTAÑO.

DIEZ: El día dieciocho (18) de octubre de dos mil ocho (2008), el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se presenta VOLUNTARIAMENTE ante la UNIDAD DE REACCION INMEDIATA, para afrontar los cargos que se le endilgaban, procediéndose a practicar la respectiva audiencia de Legalización de Captura, Imputación de cargos y medida de Aseguramiento, dentro de la cual el señor

DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, NO ACEPTO LOS CARGOS. Audiencia en la cual se resuelve sobre la solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, en el sentido de abstenerse de imponérsele la misma al procesado. Decisión que fue recurrida por la FISCALIA, recurso el cual fue declarado desierto ante la falta de sustentación del mismo.

ONCE: El día 27 de Septiembre de 2013, por parte del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE GUADALAJARA DE BUGA, se profiere el Fallo de Primera Instancia, a través del cual se declara la prescripción de la Acción Penal adelantada en contra del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por los delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO y OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO.

DOCE: Dentro del proceso penal seguido contra el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se presentó un retardado injustificado en el agotamiento de las distintas etapas procesales, a cargo de los agentes judiciales y fiscales, puesto que, entre la fecha de realización de la Audiencia de Imputación de Cargos, la cual data del DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO (2008), a la fecha de PRONUNCIAMIENTO de la decisión de fondo, preferida el VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), transcurren CINCO AÑOS, durante los cuales se mantuvo vulnerados los derechos fundamentales del procesado, vulneración que no cesó con la emisión del referido fallo, al no haberse resuelto el fondo del asunto, consistente en la determinación de la INOCENCIA del señor CAICEDO PEREZ, con lo cual se le causan perjuicios a los demandantes.

TRECE: Es por este actuar que se convoca a la NACION, RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL, ya que el daño causado a los convocantes es antijurídico, puesto que el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, no estaba obligado a soportar indefinidamente un PROCESO PENAL, que se tornó TORTUROSO debido a que: NO EXISTIO PRUEBA CLARA que le permitiera a la FISCALIA GENERAL DEL NACION fundar su solicitud de ACUSACION; Debido al constante CAMBIO DE JUEZ, en varias ocasiones se suspendió AUDIENCIAS por parte de dichos FUNCIONARIOS; Y donde se incurrió en una falta total de concentración procesal, que conllevó a que el Juez decidiera FINALMENTE que el proceso contra el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, le ha PRESCRITO, a pesar de que por la Juez de Conocimiento se había DADO UN SENTIDO DEL FALLO CONDENATORIO.

CATORCE: La antijuridicidad del daño, surge como consecuencia de la dilación injustificada del proceso penal iniciado en contra del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, por los delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO y OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, al haber sido tramitado sin la observancia de los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, los cuales se encuentran revestidos de arraigo constitucional, al tenor de los establecido en los artículos 29 y 228 de la Constitución Nacional.

QUINCE: El resarcimiento que se pretende, le resulta imputable a los convocados, puesto que el retardo injustificado en la toma de decisiones judiciales, genera una falla del servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el cual debe responder patrimonialmente el Estado, tal y como se establece en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996.

DIECISEIS: El señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se casó con la señora, MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA, de cuyo matrimonio nacieron los hijos DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO, EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO, y ANDREA CAICEDO TOFIÑO, todos mayores de edad.

DIECISIETE: El señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, es hijo de AIDA TERESA PEREZ DE CAICEDO, quien procreó a los hermanos de este, señores JAIRO CAICEDO PEREZ, CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ, y MARIA TERESA CAICEDO PEREZ.

DIECIOCHO: La familia del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, tiene su asiento en la ciudad de Guadalajara de Buga Valle, comunidad ante la cual todos y cada uno de sus miembros, gozaba de un gran prestigio, dadas las calidades de honradez, don de gentes y de servicio, percepción que se vio afectada con ocasión del proceso penal al que fue sometido el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, sin que existiere pruebas en su contra y del cual fue absuelto por efectos de la prescripción procesal, sin que se hubiese proferido pronunciamiento de fondo acerca de la comisión o no de los delitos que le imputaba.

DIECINUEVE: El nombre del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, nunca más fue considerado por parte del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga Valle, para la provisión de vacantes de funcionarios judiciales.

VEINTE: El desempeño profesional del señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ, se ha visto fuertemente afectado, dado el amplio impacto que en el medio judicial tuvo la noticia de su vinculación al proceso penal, en el que se le imputaban la comisión de los delitos de OBTENCION DE DOCUMENTOS PUBLICO FALSO, ESTAFA, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y ASESORAMIENTO ILEGAL.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Constitución Política, Artículos 2, 5, 21, 28, 29, 90; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Artículo 140 y siguientes. Artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

PRUEBAS

DOCUMENTALES

Solicito se tengan como pruebas los siguientes documentos aportados en fotocopia:

- 1) Registro civil de matrimonio de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ y MARTHA LUCIA TOFIÑO MEDINA
- 2) Registro civil de nacimiento de los señores DAVID ESTEFAN CAICEDO TOFIÑO, EDDER ALBERTO CAICEDO TOFIÑO y ANDREA CAICEDO TOFIÑO.
- 3) Registro Civil de nacimiento de DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ.
- 4) Registro civil de nacimiento de JAIRO CAICEDO PEREZ, CARLOS ALBERTO CAICEDO PEREZ, MARIA TERESA CAICEDO PEREZ.
- 5) Constancia de Tiempo de Servicio expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga Valle.
- 6) Historia Clínica del Valle del Lili.
- 7) Copia del Acta de Audiencia de Imputación y Medida de Aseguramiento, practicada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal el 19 de octubre de 2008.
- 8) Copia de la Sentencia 134, de fecha septiembre veintisiete (27) de dos mil trece (2013), proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la ciudad de Guadalajara de Buga.

TESTIMONIALES

TESTIGOS DE VIDA COMÚN

Sírvase hacer comparecer a su Despacho a la siguientes Personas:

20

a) MARIA PATRICIA LORZA GALVIS, Identificada con la Cédula de Ciudadanía Nro. 38.858.016, a quien se puede citar en la Calle 7 Nro. 14-32, Palacio de Justicia de Buga Valle.

b) JUAN CARLOS LOZANO ROMERO, a quien se puede citar en la Calle 7 Nro. 14-32, Palacio de Justicia de Buga Valle.

c) HAROLD PANESSO MENDEZ, a quien se puede citar en la sede del Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga Valle.

OBJETO DE LOS TESTIMONIOS

Los testigos declararan sobre los hechos de la demanda, en especial sobre la tristeza, dolor y aflicción sufrida por los convocantes, las afujías y disfunción familiar que ha debido padecer con ocasión del proceso penal al que fue vinculado el señor DIEGO JOSE CAICEDO PEREZ. Las demás que las partes y el Honorable Juez, instructor del proceso tenga a bien formular.

ANEXOS

Me permito anexar los documentos aducidos como pruebas en el Capítulo anterior, poderes otorgados a mi favor, copia de la demanda para el archivo y de ésta y sus anexos para el traslado a las Entidades demandas y al Ministerio Público, y copia de la demanda en medio magnético cd.

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA

De acuerdo con lo establecido en el literal h) del numeral 2 del Artículo 164 del CPACA, me encuentro dentro del término de ley para instaurar la presente demanda, toda vez que la decisión judicial por medio de la cual se declara la prescripción de la Acción Penal, se profirió el día 27 de Septiembre de 2013, y a

raíz de la presentación de la solicitud de la conciliación prejudicial, el día 25 de septiembre de 2015, se generó la interrupción del cómputo del bienio, hasta la expedición de la respectiva constancia de fallida, del 24 de Noviembre de 2015, en consecuencia la acción caducaría el próximo 26 de Noviembre de 2015.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

21

De conformidad con el artículo 161 de la Ley 1437 de 2001, este requisito se cumplió y se anexa:

- a. Acta No. 390 del 24 de Noviembre de 2015 de la Procuraduría 19 Judicial II para asuntos Administrativo del Valle.
- b. Constancia del 24 de Noviembre de 2015 de la Procuraduría 19 Judicial II para asuntos Administrativo del Valle.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Estimo la cuantía de la presente convocatoria por el valor de la pretensión mayor, que equivale a la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 60.000.000.00), correspondiente a lo pedido por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de Daño Emergente en favor del perjudicado directo, según la estimación realizada al tiempo de presentación de la presente convocatoria.

COMPETENCIA

A la presente demanda se le dará el trámite de la Pretensión de Reparación Directa de Primera Instancia.

La Competencia radica en los Juzgados Administrativos del Circuito de Buga Valle del Cauca, en Primera Instancia, por ser Jurisdicción del lugar de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda y por la naturaleza del asunto. En segunda instancia ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

NOTIFICACIONES

RAMA JUDICIAL representada por el Director Ejecutivo de Administración judicial o quien haga sus veces en sus ausencias temporales y definitiva, en la ciudad de Santiago de Cali en la carrera 5 # 7-65, piso 5° del Edificio del Banco de Occidente, E-mail: info@cendoj.ramajudicial.gov.co.

22

Fiscalía General de la Nación, Seccional Valle, en la ciudad de Santiago de Cali en la Calle 10 No. 05 – 77 piso 8 Edificio San Francisco Teléfono: 392 79 00, E-mail: dirfiscal@fiscalia.gov.co.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO: Calle 70 No. 4 – 60 Teléfono: 2558955 Bogotá D.C., E-mail: mesaayuda@defensajuridica.gov.co y mesaayuda.litigob@minjusticia.gov.co.

Las de mis mandantes en la Calle 10 No 17-51 Barrio Ricaute de Guadalajara de Buga.

A la suscrita en mi Oficina de Abogado ubicada en la Calle 10 No. 17-51 de Guadalajara de Buga, Teléfono- 3175392423-3165272941.

Del señor Procurador,

ANDREA CAICEDO TOFIÑO
C.C. No. 1.115.071.122 de Buga
T.P. No. 224.556 del C.S.J.